


SUBSANACION DE DEMANDA

Yair Diaz tamara <nerbuf@yahoo.es>

Mié 28/10/2020 15:20

Para: Juzgado 17 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andrés Navarrete Grijalba <notificaciones@emcali.com.co>; julio2005@hotmail.com <juligo2005@hotmail.com>; juligoca@hotmail.com <juligoca@hotmail.com>; nerbuf <nerbuf@yahoo.es>

 1 archivos adjuntos (1 MB)

Subsanacion de demanda pablo bermudez mina (1) pdf.pdf;

SEÑORES

JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI

ESD

RAD. 2020/212

DTE: PABLO ENRIQUE BERMUDEZ Y OTROS

DDOS: EMCALI Y OTROS

Asunto: SUBSANACION DE DEMANDA

Adjunto se envía en PDF subsanación de demanda y anexo de subsanción

-

Por favor acusar recibido

-

Cordialmente

YAIR DIAZ TÁMARA

APDO DEMANDANTE

Enviado desde [Correo](#) para Windows 10

SEÑOR
 JUEZ DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI
 OSCAR JULIAN BTANCOURT ARBOLEDA
 Cordial saludo

Ref. PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
 DTE: PABLO ENRIQUE BERMUDEZ MINA Y OTROS
 DDOS: JULIAN GONZALEZ CASAS, EMCALI S.A ESP.
 Rad. 212/2020

Asunto: subsanación de demanda

Quien suscribe, YAIR DIAZ TÁMARA identificado como aparece al pie de mi firma, con personería jurídica reconocida como apoderado judicial de los demandantes conforme se dispuso mediante auto interlocutorio N° 2281 del 27 de octubre de 2020, subsano los defectos de forma indicados a fin de su admisión.

Frente al primer punto señalado por el despacho de no haberse dado cumplimiento a lo ordenado en el numeral 6° del decreto extraordinario 806 de 2020 de no acreditación de remisión de copia de la demanda y sus anexos a los correos electrónicos de los demandados debe aclararse que tal remisión sí fue realizada de manera conjunta con el envío de la demanda por mensaje de datos a la oficina judicial de este distrito judicial, agencia que para poder realizar las acciones de reparto tamiza desde ese momento la señalada remisión y de encontrar tal omisión realiza la devolución con las advertencia en torno a tal situación lo cual no fue este el caso , en todo caso para claridad del despacho se adjuntarán las constancias conforme se ha señalado en la providencia admisorio.

Con el presente memorial se adjuntan los siguientes documentos:

- 1.escrito de demanda subsanada en el epígrafe de las pretensiones respecto de la quinta y sexta conforme lo señaló el dispensador judicial.
- 2.constancia de remisión de la demanda inicial con sus respectivos anexos a los demandados Julián González casas y EMCALI S.A ESP.
3. copia simple del registro civil del demandante Juan Pablo Bermúdez Martínez
4. constancia de remisión de la subsanación de la demanda.

Con gentileza y respeto

YAIR DIAZ TÁMARA
 CC N° 3.800.165 expedida en Cartagena
 TP N° 158411

SEÑOR:
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI
ESD

i. CLASE DE PROCESO

Demanda ordinaria laboral de primera instancia por RESPONSABILIDAD PLENA Y ORDINARIA DE PERJUICIOS **art. 216 CST.**

ii. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

Demandantes: PABLO ENRIQUE BERMÚDEZ MINA, ERIKA MARTINEZ BORRERO y OTROS.

Demandados: JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.

YAIR DIAZ TÁMARA, identificado con la cedula de ciudadanía n°3.800.165 expedida en Cartagena DT y de C, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional n°158411 del CSJ, instauro demanda ordinaria laboral de primera instancia por responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios de conformidad con lo preceptuado en el **artículo 216 del código sustantivo del trabajo**, en condición de apoderado judicial de los demandantes **PABLO ENRIQUE BERMUDEZ MINA**, identificado con la cedula de ciudadanía N ° 16.761.232 expedida en Cali, **ERIKA MARTINEZ BORRERO** identificada con la cedula de ciudadanía n°31.569.397, **LADI JOHANA BERMUDEZ MARTINEZ** identificada con la cedula de ciudadanía n°143964402, **MAYERLI BERMUDEZ MARTINEZ** identificada con la cedula de ciudadanía n ° 1143973425, **JUAN PABLO MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía n°1.005.833.480, en los términos del instrumento poder especial conferido, en contra de los demandados **JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS** identificado con la cedula de ciudadanía N° 76.319.787 expedida en Popayán, **EMPRESAS MUNICIPLAES DE CALI - EMCALI EICE ESP.** Nit 890.399.003-4, representada legalmente del señor **JUAN DIEGO FLOREZ** o por la persona que haga sus veces, para que mediante sentencia de mérito que haga transito cosa juzgada se le condene a todas y cada una de las pretensiones del presente libelo incoatorio, con sustento en los siguientes

iii. FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero: la demandada EMPRESAS MUNICIPLAES DE CALI - EMCALI EICE ESP y el demandado JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS celebraron entre 2017 y 2018 contrato de prestación de servicios para llevar a cabo adecuaciones locativas y mantenimiento de algunas de las plantas y sedes de aquella en la ciudad de Cali.

Segundo: en virtud del contrato civil entre los demandados, el señor JULIÁN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS a inicios de 2018 contrató los servicios personales y subordinados del demandante PABLO ENRIQUE BERMÚDEZ MINA como operario de construcción de una obra civil desarrollada en las plantas de agua de las empresas públicas municipales de Cali EMCALI.

Tercero: el trabajador demandante y empleador demandado acordaron como asignación salarial por el servicio personal prestado por aquel, el equivalente a \$ **1.680.000** un millón seiscientos ochenta mil pesos mensuales M/Cte, pagados por periodos mensuales.

Cuarto: el demandante PABLO ENRIQUE BERMUDEZ MINA, cumplía de manera obligatoria y rigurosa horarios de trabajo para la prestación de su servicio personal, recibía órdenes de obligatorio cumplimiento de parte de ingenieros representantes del demandado JULIAN LISANDRO GONZALE CASAS en la obra ya mencionada.

Quinto: el demandante PABLO ENRIQUE BERMÚDEZ MINA para poder desempeñar el servicio personal para el cual fue contratado, utilizaba herramientas de trabajo, calzado y vestido de la labor suministradas por su empleador el demandado JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS.

Sexto: el día 26 de enero de 2018 el demandante PABLO ENRIQUE BERMUDEZ MINA sufrió un accidente de trabajo bajo las órdenes de representantes del demandado JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS en las instalaciones de planta de tratamiento de agua de la demandada empresas municipales de Cali EMCALI, sede Meléndez.

Séptimo: respecto de los móviles del accidente, el demandante se encontraba en la sede de subestación de Meléndez realizando labores de mantenimiento y reposición de un tejado de una planta de tratamiento de agua a una altura de 5.50 metros por orden previa de su empleador.

Octavo: al tratar de acceder al cercho de la estructura del tejado en la altura señalada, este colapsó debido a que se encontraba fracturado provocando la caída súbita del demandante hasta la superficie terrestre provocando graves lesiones en su cuerpo.

Noveno: el empleador demandado JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS dispuso de la realización de trabajos en alturas para el mantenimiento del tejado en la sede de la demandada EMCALI sin dotar al demandante de los equipos específicos de protección y detección individual contra caídas, tales como arnés, líneas de vida.

Decimo: para la realización de la labor en la el demandante sufrió el accidente de trabajo, el demandado JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS no dispuso de la presencia de un coordinador de trabajo en alturas como lo ordena el numeral 15 del artículo 2 y numeral 6 del artículo 3 de la resolución 1409 de 2012 expedida por el ministerio de trabajo a fin de identificar las condiciones de peligro que podían estar afectando al trabajador accidentado antes de la ocurrencia del accidente acaecido y aplicar De inmediato las medidas correctivas para controlar los riesgos.

Décimo primero: que el empleador demandado JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS previo a la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el demandante, no inspeccionó a través de un Coordinador para trabajo en alturas, los implementos para protección personal y específicos de trabajo en alturas Que serían utilizados para la maniobra en la que finalmente resultó lesionado el demandante PABLO BERMUDEZ MINA.

Décimo segundo: el empleador demandado JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS con relación al accidente de trabajo ocurrido al demandante, no implementó ninguna **medida Pasiva de protección** a fin de **detener o capturar** al demandante en el trayecto de su caída e **impedir el** contacto con la superficie física tal como lo ordena el **artículo 21 de la resolución 1409 de 2012**, expedida por el ministerio del trabajo. ¹

Décimo tercero: las demandadas previamente a la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por mi representado, omitieron la ejecución de los protocolos previos de inspección y vigilancia como diligenciamiento de lista de chequeos para poder constatar que el trabajador accidentado se encontrara debidamente capacitado para ejercer la labor de alto riesgo, en la que se verificaran además los puntos de anclaje a utilizar por el trabajador en la tarea a desarrollar y la verificación de un sistema para protección y prevención de caídas, así como la estricta inspección de los elementos de seguridad.

Décimo cuarto: el informe de investigación de accidente de trabajo realizado por la ARL COLPATRIA como administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado el demandante al momento del siniestro ocurrido arrojó como causas inmediatas que ocasionaron el accidente de trabajo las siguientes:

¹ **Artículo 22.** Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Para los fines de esta resolución, las medidas de protección se clasifican en pasivas y activas:

1. **Medidas Pasivas de Protección:** Están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo.5

i. condiciones peligrosas: criterios inadecuados de diseño, especificaciones y normas 2103, consideraciones inadecuadas de los factores ergonómicos, ii. No se evidencia programa de protección contra caídas (PPCC), iii. El techo se encontraba fracturado.

Décimo quinto: dentro de las soluciones propuestas por la ARL COLPATRIA en el informe de accidente de trabajo realizado se encontró la implementación del programa de protección contra caídas, inspecciones preoperacionales de instalaciones locativas, equipos, herramientas mecánicas, dispositivos para trabajo en alturas y equipos de protección personal (EPP).

Décimo sexto: el informe de investigación de accidente de trabajo realizado por la ARL COLPATRIA estableció como medidas preventivas y correctivas entre otras las siguientes:

- i implementación del programa de protección contra caídas a todas las obras civiles de JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS, ii. Implementación de análisis de trabajo seguro por cada una de las actividades críticas y de alto riesgo que se realicen en obra, iii. adoptar medidas de protección colectiva o en su defecto, de protección individual, iv. Evaluación de riesgos y ejecución de planes de acción, v. capacitación al personal en los factores de riesgo asociados a sus labores, vi. Capacitar al personal en trabajo seguro en alturas.

Décimo séptimo: debido a las lesiones sufridas con el accidente de trabajo sufrido, el demandante estuvo incapacitado por un lapso mayor a (18) meses tiempo en el cual el empleador demandado pagó el valor de las incapacidades laborales con un monto equivalente a un salario mínimo legal.

Décimo octavo: como consecuencia de las lesiones sufridas con en el accidente de trabajo, el demandante presenta una pérdida parcial y permanente de la capacidad laboral equivalente al 33.70 % conforme lo estableció la junta regional de calificación de invalidez del valle del cauca en dictamen n° 16761232-6156 del 24 de octubre de 2019, el cual valga decir aún no está en firme por encontrarse en sede de apelación.

Décimo noveno: con el accidente de trabajo el demandante presentó múltiples fracturas a nivel del cubito y del radio de las extremidades superiores, así como fractura de la pared anterior del hueso frontal o escafoides (navicular) y politraumatismo a nivel de abdomen y dolor agudo en hombro derecho con limitación total de flexión y síndrome de manguito rotatorio, razón por la cual fue intervenido en este último con material de osteosíntesis consistente en 18 tornillos de fijación permanente.

Vigésimo: las secuelas que presenta el demandante han causado un trastorno depresivo posterior al trauma craneoencefálico, ideas depresivas por su minusvalía, por el dolor físico permanente a nivel poliarticular causándose por ello un perjuicio moral debido al estado de agobio, depresión, congoja, desesperanza y sufrimiento.

Vigésimo primero: el grupo familiar del trabajador accidentado se han visto afectados en sus sentimientos, experimentando congoja y agobio por el estado de sufrimiento que padece su esposo y padre quien como cabeza del grupo familiar proveía el sostenimiento económico.

Vigésimo segundo: los daños corporales, emocionales y psicológicos sufridos por el demandante como la reconstrucción total ligamentaria de la mano derecha, la fijación de 18 tornillos a nivel del hueso frontal para alineación ósea que generan fuertes cefaleas de manera permanente, generando limitación funcional que ha causado un daño a en la esfera psicofísica que afectan de manera permanente su salud,

Vigésimo tercero: debido a las lesiones psicofísicas causadas, el trabajador accidentado debe ingerir indefinidamente cerca de 18 pastillas diarias para el control de los episodios de ansiedad y las patologías que afectan la esfera psicofísica del trabajador accidentado

Vigésimo cuarto: el demandado **JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS** no ha pagado al demandante las primas legales, valor en dinero de las vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías causadas durante el año 2018.

Vigésimo quinto: la actividad personal desarrollada por el demandante **PABLO BERMUDEZ MINA** al momento del accidente de trabajo sufrido, corresponden a actividades afines y no extrañas a las que corresponden al giro ordinario de las actividades de la demandada EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPLAES DE CALI sigla EMCALI S.A ESP para la época del accidente de trabajo sufrido por el trabajador

iv. PRETENSIONES

Respetuosamente solicito que mediante sentencia meritoria que profiera las siguientes:

Declaraciones

Primero: que declare la existencia de una relación jurídica de trabajo dependiente regida por un contrato de trabajo entre el señor **PABLO BERMUDEZ MINA** y el señor **JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS** a partir de noviembre de 2017.

Segundo: que se declare la culpa patronal del señor **JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS** del accidente de trabajo sufrido por el demandante **PABLO BERMUDEZ MINA** ocurrido el día 26 de enero de 2018.

Tercero: que se declare al señor **JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS** y a **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE ESP** solidariamente responsables de pagar una indemnización plenaria de perjuicios en favor del demandante **PABLO BERMUDEZ MINA**, así como solidariamente responsables de pagar perjuicios morales en favor de los demandantes **ERIKA MARTINEZ BORRERO, LADI JOHANA BERMUDEZ MARTINEZ, MAYERLI BERMUDEZ MARTINEZ, JUAN PABLO BERMUDEZ MARTINEZ.**

Condenatorias

Con el debido respeto pido que se imponga sentencia condenatoria en contra de los demandados **JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS y a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP** declaradas solidariamente responsables en los siguientes términos:

Primero: Al pago de los perjuicios materiales a favor del señor **PABLO BERMUDEZ MINA** por concepto de lucro cesante consolidado, para lo cual se tomará como base la proporción del ingreso mensual devengado por el demandante junto con su componente prestacional, multiplicado por el número de meses que tiene el año hasta la fecha de la sentencia, según la siguiente fórmula:

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:

$$SA = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde; S = LUCRO CESANTE CONSOLIDADO

Ra = renta actualizada, para su obtención se aplica la siguiente formula;

Índice final x valor histórico, donde dicho valor es el último salario Devengado por el demandante.

ÍNDICE INICIAL

1 = constante matemática

i = interés legal del 6% convertido a interés mensual equivalente a 0,005.

n = número de meses transcurridos entre la fecha del daño y la fecha actual o hasta que se profiera sentencia condenatoria.

Entendido el lucro cesante consolidado como el causante desde la fecha del accidente hasta la fecha de la sentencia.²

² Sentencia del 30 de junio de 2005 rad. (22556).

Segundo: Al pago de los perjuicios de contenido material a favor del señor PABLO BERMUDEZ MINA por concepto de lucro cesante futuro los cuales deberán establecerse según el siguiente criterio de tasación:

Se tomará el salario devengado para la fecha del accidente, más el 30% del valor prestacional, este valor se considera en Forma proporcional a la pérdida de capacidad laboral, porcentaje que conocerá con la prueba pericial solicitada en el acápite que corresponde.

La fórmula utilizada incluye la indexación de los ingresos laborales más intereses del 6% anual así:

$VA = LCM \times an$

LCM = lucro cesante mensual

$an = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$

Entendido el lucro cesante futuro como el causante entre la fecha de la sentencia hasta el cumplimiento de la vida probable del trabajador.³ Para tales efectos debe tenerse en cuenta la esperanza de vida o promedio de vida probable según la tasa de mortalidad reducida en números enteros a meses, la edad del demandante al momento del Accidente de trabajo la cual corresponde a 50 años.

Tercero: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables, al pago de los perjuicios de contenido moral causados al demandante PABLO BERMUDEZ MINA estimados en 100 cien salarios mínimos legales vigentes al momento de la sentencia de condena.

“El perjuicio moral, se fundamenta en el dolor afectivo y en el menoscabo de los sentimientos causados por las limitaciones físicas en el demandante, generando gran aflicción y depresión. Aunque imposible de resarcirlo totalmente, sí es posible paliarlo mediante el reconocimiento de una suma de dinero”.

cuarto: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago de perjuicios por daño a la salud en favor del señor PABLO BERMUDEZ MINA en un monto equivalente a cien 100 cien salarios mínimos legales vigentes al momento de la sentencia de condena.⁴

³ Sentencia del 30 de junio de 2005- rad. (22556).

⁴ sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 50001231500019990032601(31172) MP. **MELIDA VALLE DE LA HOZ**.

Se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos (...) Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro. La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea **igual o superior al 50%**; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (**abuelos, hermanos y nietos**). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el

Quinto: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago del valor de las cesantías causadas entre el 24 de febrero de 2018, 14 febrero de 2019, 14 de febrero de 2020 su valor proporcional caudado a la presentación de la demanda y las que se causen en lo sucesivo del debate judicial hasta su pago efectivo tal como a continuación se especifica a continuación:

Enero a 14 de febrero de 2018= 140.000

15 de febrero de 2018 a 14 de febrero de 2019= 1.680.000

15 de febrero de 2019 a 14 de febrero de 2020=1.680.000

15 de marzo a 14 octubre de 2020= 1.120.000

Total, en cesantías hasta la subsanación de la demanda: \$ 4.620.000

Sexto: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago del valor de los intereses las cesantías causadas entre el 24 de febrero de 2018, 14 febrero de 2019, 14 de febrero de 2020 su valor proporcional caudado a la presentación de la demanda y las que se causen en lo sucesivo del debate judicial hasta su pago efectivo tal como a continuación se especifica a continuación:

14 de febrero de 2018= 16.800

14 de febrero de 2019= 201.600

14 de febrero de 2020= 201.600

14 de marzo a 14 octubre de 2020= 134.400

Total, por intereses de cesantías hasta la subsanación de la demanda: \$ 554.400

Séptimo: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago del valor de las primas causadas entre junio y diciembre de 2018, junio y diciembre de 2019, junio de 2020 y el valor proporcional por fracción de tiempo causado entre julio a octubre de 2020 como fecha de subsanación de la demanda y las que se causen en lo sucesivo del debate judicial discriminados así:

Enero a junio de 2018= 840.000

Julio a diciembre de 2018 = 840.000

Enero a junio de 2019 = 840.000

Julio a diciembre de 2019= 840.000

Enero a junio de 2020 = 840.000

Julio a octubre de 2020= 560.000

Total, por primas de servicios \$ 4.760.000

Octavo: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago del valor compensado de las vacaciones por los periodos de año de 2018, 2019, 2020 y las que se causen en lo sucesivo del debate judicial tal como se especifica:

2018= 1.680.000

2019= 1.680.000

2020= 1.680.000

Total, por valor en dinero de las vacaciones: \$ 5.040.000

Noveno: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables, al pago de una sanción moratoria de un día de salario devengado por cada día de retardo por la no consignación de las cesantías del periodo anual de 2018 ante un fondo de cesantías, sanción causada a partir del 15 de febrero de 2018 hasta el pago efectivo del valor adeudado por dicho concepto, que hasta el 14 de octubre de 2020 asciende a la suma de \$ 54.320.000.

Para liquidar la sanción adeuda se deberá liquidar el salario diario devengado de 56.000 por el número de días transcurridos a 14 de octubre de 2020 equivale a 970 días.

Decimo: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago de una indemnización por perjuicios morales en favor de los demandantes ERIKA MARTINEZ BORRERO, LADI JOHANA BERMUDEZ MARTINEZ, MAYERLI BERMUDEZ MARTINEZ, JUAN PABLO BERMUDEZ MARTINEZ en un monto equivalente para cada uno de 50 salarios mínimos legales vigentes al momento de la sentencia.

Decimo primero: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago de toda pretensión extra, ultra y minus petita que resulte probado y discutido en el debate judicial.

Décimo segundo: condenar a los demandados declarados solidariamente responsables al pago de costas y agencias en derecho al resultar vencida en juicio.

v. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

Normas internacionales del trabajo: convenio 120, 155, 161, 167, 187 de la OIT,

Normas violadas por el empleador Julián González casas. artículo 22, 23, 24, 34, 56 57, 216, 348 del código sustantivo del trabajo, Artículo 53 de la Constitución Política, **resolución 3673 de 2008** sobre reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, resolución 736 de 2009, resolución 1486 de 2009, resolución 1938 de 2009, circular 070 de 2009, resolución 2291 de 2010, **resolución 1409 de 2012** artículo 16, literal D), por la cual se establece el reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, artículos 63, 1494, 2341 del código civil, **Resolución 1016 de 1989:** artículo 1°. Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas, subcontratistas están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional de acuerdo con la presente resolución. **Artículo 11:** el subprograma de higiene y seguridad industrial tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. **Principales actividades del subprograma de higiene y seguridad industrial:** 1. elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y la evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por ellos, 2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos,

porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento **de 50 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%.**

La doctrina alude al perjuicio fisiológico como aquel que afecta a las "actividades placenteras" que deja de cumplir el trabajador en virtud del daño causado. Si la fisiología es la "ciencia que estudia la vida y las funciones orgánicas" al causarse un daño en la humanidad de la persona, viene de inmediato un padecimiento Emocional interno general a raíz del traumatismo que le causa por la compasión que pueda despertar, la repulsa que provoca en algunos casos y el desdén por los placeres que ofrece la vida, todo lo cual encierra el daño moral que debe tasarse en una determinada suma atendiendo como primera medida el aspecto psicológico y ver si se puede agravar por ser víctima de un rechazo, que no le permite disfrutar de una determinada actividad vital que no en todos los casos podrá ser igual y por tanto debe objetivarse en lo posible. **Sentencia 9674 de 1997 MP. JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA**

Eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes Mediante inspecciones periódicas a las áreas frentes de trabajo y equipos en general, **5.** Estudiar e implementar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes en la empresa, **8.** Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitución de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o el medio de los agentes de riesgo, **12.** Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo. **Artículo 9 de la ley 9 de 1979** establece: **Artículo 80:** a) prevención. Maximizar la salud de las personas previniendo enfermedad con ocasión del trabajo desempeñado, b) protección: dada la exposición a uno y otro riesgo físico, químico, biológico, ergonómicos, mecánico, c) eliminar o controlar los agentes nocivos ubicados en los puestos de trabajo. **Artículo 112:** las maquinarias, equipos y herramientas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles causas de enfermedades y accidentes.

Normas técnicas colombianas: NTC 2012, NTC 2037 relacionadas como normas para el uso de cinturones yarneses, NTC seguridad industrial- metodología para el análisis de tareas, NTC 2095 Higiene y seguridad.

CULPA DEL EMPLEADOR DEMANDADO JULIAN GONZALEZ CASAS DE LA INDEMNIZACION PLENA Y ORDINARIA DE PERJUICIOS.

Los medios de evidencia documental y testifical que soportan la estructura fáctica de la presente acción ordinaria dan claridad que el accidente de trabajo sufrido por el demandante PABLO BERMUDEZ MINA obedeció a la omisión del empleador demandado de brindar el suficiente cuidado y la adecuada protección en la realización del trabajo contratado, tal omisión presenta una conexión causal entre el comportamiento negligente que se individualiza en la culpa leve en la que incurrió el empleador descrita en el **artículo 63** del código civil, con los daños causados.

Demostrado la existencia real, cierta y concreta de los daños sufridos por los demandantes, les asiste el derecho indemnizatorio integral de los perjuicios causados por culpa de quien tenía deber de protección y cuidado pero que no lo empleó, es decir por no haber empleado el cuidado que generalmente emplean los hombres en sus negocios propios; efecto jurídico predicado de lo preceptuado en el artículo 2341 del código civil en el siguiente sentido:

“el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

Es por ello que el artículo 216 código sustantivo del trabajo consagra el derecho que le asiste al trabajador de reclamar al patrono los perjuicios causados cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, quedando obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios... (...), institución jurídica que requiere para su procedencia los siguientes presupuestos jurídicos y facticos:

(i).la ocurrencia de un accidente de trabajo o la aparición de una enfermedad profesional; (ii). La existencia de un daño; (iii). El nexo de causalidad entre el hecho y el daño; (IV). Y la culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo.

La relación jurídica de trabajo subordinado regida por un contrato de trabajo es para las partes en especial para el empleador demandado fuente de obligaciones, deberes y cuidado a favor de los trabajadores a su servicio, fundamento que encuentra sostén jurídico en el artículo 1494 del código civil Que sostiene:

“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en el contrato o en las convenciones”.

La jurisprudencia laboral de la honorable sala laboral de la corte suprema de justicia ha tenido un sólido desarrollo de la responsabilidad plenaria por culpa del empleador, verbigracia se pronunció en una de las sentencias iconos con la ponencia de la magistrada **ISAURA VARGAS DIAZ, Rad. 22656 del 30 de junio de 2005:**

“Los deberes de protección y seguridad que tiene el empleador con su trabajador le imponen comportarse y conducirse en el desarrollo y ejecución de la relación de trabajo de conformidad con los intereses legítimos del trabajador, los cuales, a su vez, los cuales le demandan tomar las medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, tendientes a evitar que aquel sufra menoscabo de su salud o integridad a causa de los riesgos del trabajo. Cuando ello no ocurre así, esto es, cuando se incumplen culposamente estos deberes que surgen del contrato de trabajo emerge, entonces, la responsabilidad del empleador de indemnizar ordinaria y totalmente al trabajador los daños causados.”

“De suerte que, la prueba del mero incumplimiento en la ‘diligencia o cuidado ordinario o mediano que debe desplegar el empleador en la administración de sus negocios, para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla, en consecuencia, de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador. “La abstención en el cumplimiento de la ‘diligencia y cuidado’ debidos en la administración de los negocios propios, en este caso, las relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para infligir al empleador responsable la indemnización ordinaria y total de perjuicios.

“No puede olvidarse, además, que ‘la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo’, tal y como lo pregonan el artículo 1604 del código civil, por tanto, amén de los demás supuestos, probada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, en otras palabras, de diligencia y cuidado, se prueba la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios causados y, por consiguiente, si el empleador pretende cesar en su Responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal y como de manera genérica lo dice el artículo 1757 del Código Civil.

El empleador demandado incumplió los deberes consagrados en el **artículo 56** del estatuto laboral consagra que de modo general incumben al patrono obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores, ya estos, obligaciones de obediencia para con el patrono, En igual sentido incumplió el **artículo 57** de la misma codificación establece las obligaciones específicas del patrono como se lee:

1. poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.

A su turno el empleador demandado incumplió las obligaciones laborales consagradas en el artículo 348 de la normativa impone a todo patrono o empresa la obligación de suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar exámenes médicos a su personal y adoptar todas las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio [...].

El informe de investigación de accidente de trabajo deja en evidencia paladina que el empleador demandado al momento del accidente de trabajo sufrido por el demandante no tenía implementado un programa de prevención y protección contra caídas en alturas tal como lo establece el Artículo 6° de la resolución 1409 de 2012 en los siguientes términos: **Definición programa de prevención y protección contra caídas en alturas.** Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e

interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas y las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.

Que el Artículo 8° de la norma en cita define las Medidas de prevención. Como aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realicen trabajo en alturas. Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, **permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión.**

Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas los cuales deben ser fácilmente entendibles y comunicados a los trabajadores desde los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada para lo cual podrá consultar con los trabajadores que intervienen en la tarea. Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando:

a) Cambien las condiciones de trabajo; **b)** Ocurra algún incidente o accidente; o, **c)** Los indicadores de gestión así lo definan;

El informe de investigación de accidente de trabajo deja al descubierto que el empleador demandado para el momento del siniestro laboral objeto de controversia no venía ejecutando un sistema de ingeniería para prevención de caídas tal como lo define el artículo 15 de la resolución 1409 de 2012 que se definen como aquellos sistemas Relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición. Tales sistemas deben estar documentados y fundamentados dentro del Subprograma de Protección contra Caídas del Programa de Salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

En la misma dirección queda demostrado que el empleador demandado al momento del accidente de trabajo sufrido por el demandante tampoco implementó una medida complementaria de prevención como un ayudante de seguridad con el fin de ayudar a advertir y controlar los peligros y riesgos que se identifiquen en el sitio donde se desarrollen trabajos en alturas como lo dispone **el literal g del artículo 16 de la resolución 1409 de 2012.**

La orden de acceder a un tejado recibida por el trabajador accidentado implicaba en todo caso que el empleador lo proveyera de un sistema de acceso para trabajo en alturas que naturalmente no proveyó porque ni siquiera lo tenía implementado; dice la norma lo siguiente en cuanto a este sistema:

Artículo 18. Sistemas de acceso para trabajo en alturas. Para los fines de esta resolución que establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, se consideran como sistemas de acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, las grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas.

Se esgrimió al inicio del presente fundamento que los sistemas de protección contra caídas estuvieron ausentes en el sitio de trabajo donde el trabajador accidentado sufrió el siniestro laboral porque las pruebas arrimadas evidencian que no existía ni un solo dispositivo para detener la caída del trabajador u ocurrida esta, mitigar al menos sus consecuencias, Así lo dispone el **Artículo 21. Medidas de protección contra caídas.** Las medidas de protección contra caídas son aquellas implementadas para detener la caída, una vez ocurra, o mitigar sus consecuencias.

El empleador debe definir, las medidas de prevención y protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya sea de manera

ocasional o rutinaria, estas medidas deben estar acordes con la actividad económica y tareas que la componen.

Artículo 22. Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Para los fines de esta resolución, las medidas de protección se clasifican en pasivas y activas:

1. Medidas Pasivas de Protección: Están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo.

Los sistemas de red de seguridad para la detención de caídas están dentro de las principales medidas pasivas de protección cuyo propósito es, detener la caída libre de personas y objetos. Si se presenta caída de escombros, se colocará una red especial para escombros según Especificaciones del fabricante.

Finalmente queda demostrado que el trabajador accidentado no fue dotado por parte del empleador de un sistema de protección activa contra caídas para activar su suspensión o detección como lo es una línea de vida con sus respectivos puntos de anclajes y conectores para tales fines....

Convenio 155 Artículo 16 de la O.I.T. sobre seguridad y salud de los trabajadores.

1-deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control sean seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores.

la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008 el cual tiene definido unos alcances y principios de los cuales enunciamos: la ampliación de la seguridad social a todas las personas, incluidas medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y cobertura para responder a las nuevas necesidades e incertidumbres generadas por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos y económicos;– **condiciones de trabajo saludables y seguras** – fomentar la eficacia de la legislación y las instituciones laborales, en particular respecto del reconocimiento de la relación de trabajo, la promoción de buenas relaciones laborales y el establecimiento de sistemas eficaces de inspección del Trabajo; sin duda alguna dicha declaración es una validación de algunos convenios ratificados e insertos en nuestra normatividad vigente y en algunos casos hacen incluso parte del bloque de constitucionalidad, siendo los convenios 120 convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 155 (seguridad y salud de los trabajadores) 161 (servicio de salud en el trabajo) 187 (convenio sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo).

La OIT ha desarrollado medidas y estrategias para prevenir, controlar, reducir o eliminar peligros y riesgos profesionales.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de OIT se basa en los siguientes principios:

PHVA: planificar, hacer, verificar, actuar (objetivo: Establecer un mecanismo global y estructurado para la acción conjunta entre la dirección y los trabajadores en la aplicación de las medidas de seguridad y salud.)

La organización internacional del trabajo ha venido manifestando su preocupación sobre las condiciones laborales de los trabajadores en todo el mundo y ha venido trazando estrategias globales a partir de las reuniones anuales que se celebran en el seno de dicho organismo, entre las que tenemos la Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo (2003) (conclusiones conferencia internacional del trabajo en su 91ª reunión)⁵

⁵ “una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos; y la atribución de la máxima prioridad al principio de la prevención.”

Es evidente que este tipo de medidas fueron incumplidas por el empleador como principal responsable de la seguridad e integridad de Los subordinados, como dador del laborío, lo Cual le impone el deber de indemnizar como causante del daño a la luz de las normas del trabajo y la jurisprudencia laboral, como la que ahora se cita:

La sala laboral de la corte suprema de justicia, en sentencia **SL 16102 de 2014 con radicación 44540**, con ponencia de la magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, se refirió a las medidas de protección y prevención sobre trabajo en alturas:

“en lo pertinente, el referido reglamento mantuvo en cabeza de los empleadores la ineludible obligación de ejercer labores de vigilancia y control en torno al cumplimiento de las obligaciones de seguridad en el trabajo en altura, a través de personal idóneo en la materia y con la capacidad de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, tal y como de desde antaño lo había hecho la **resolución 2413 de 1979, el convenio 167 y la recomendación 175 de la OIT.**

Entre otras cuestiones se prescribió que todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas debe << cubrir todas las condiciones de riesgo existente mediante medidas de control contra caída de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra caídas>>.

en cuanto a las medidas de protección contra caídas, se indicó que el empleador debe adoptar tanto medidas preventivas como de protección contra caídas; que los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas debían seleccionarse tomando en cuenta todos los factores de riesgo, propios de la tarea y sus características; la obligación de implementar elementos de protección individual contra caídas, sin perjuicio de las medidas de prevención y protección contra caídas (art 13) resolución 3673 de 2008; disponer de personal capacitado, competente y calificado; garantizar la operatividad de un programa de inspección de los sistemas de protección contra caídas **por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipos de personas, competentes y calificadas según corresponda.**

Así pues queda demostrada la cadena causal entre el accidente de trabajo ocurrido y las omisiones que finalmente desencadenaron en las consecuencias lesivas que elevan la acción plena de perjuicios endilgadas, silogismo

Argumentativo que deberá inclinarse paladinamente al reconocimiento de las suplicas fincadas con el libelo demandatorio.

LOS PERJUICIOS MORALES Y DEL DAÑO A LA SALUD.

Los pedimentos sobre perjuicios morales se sustentan sobre la existencia de un detrimento y afectación causados a los demandantes que se encuentran por fuera de la órbita del perjuicio material, es decir corresponden a una esfera interna, el dolor tanto físico como el que han experimentado a través de la depresión, estados de ánimo triste, las angustias, los pesares como consecuencia del siniestro laboral episodio abrupto que ha dejado efectos nocivos en su ser integral que si bien como lo ha plasmado la jurisprudencia no son evaluables o medibles por un método baremo, si ostentan la posibilidad de palear el dolor, hacer unavida al menos más llevadera para el afectado sin que con ello se pretenda la desaparición total del perjuicio pero al menos corresponder a medios de reacomodación a nuevas y alteradas condiciones de vida basado en el principio de la reparación integral contemplada en el artículo 16 de la ley 446 de 1998. Respecto del daño ha dicho moral a dicho la jurisprudencia:

El daño como elemento estructural de la responsabilidad, se afina en presencia de una situación real, concreta y cierta al momento del suceso nefasto, que ante la evidencia del mismo, altera abruptamente La condición de existencia de los afectados y/o sus bienes, es “un Detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva” (**Sala Civil, sentencia sustitutiva de 16 de septiembre de 2011 expediente 2005-00058-01**).

Resulta incontestable que no solo el trabajador accidentado resultó afecto con el accidente de trabajo ocurrido, sino también sus Parientes, en este caso como damnificados, causándoles daños indirectos. Es lo que la jurisprudencia ha llamado “damnificados de rebote o por contragolpe”, por tal razón es que se persigue la reparación de dichos perjuicios inmateriales. Así lo ha entendido la sala laboral de la corte suprema de justicia en los siguientes términos:

En tanto que los daños en la vida relación se generan por el “menoscabo en la vida de relación social, que no se equipara a la aflicción íntima, que se padece en el interior del alma, calificada como daño moral subjetivo, ni tampoco con la pérdida de la capacidad laboral, que es estimable en dinero a partir del grado de invalidez establecido por las Juntas Calificadoras; es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales; es una afectación fisiológica, que aunque se exterioriza, es como la moral, inestimable objetivamente, y por tanto inevitablemente sujeta al arbitrio judicial.” (**Sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema del 22 de enero de 2008, radicación 30.621**).

Por su parte la jurisprudencia de la sala civil se ha expresado en forma muy amplia al respecto:

la doctrina de la Sala Civil de esta Corporación enseña que “[el] perjuicio, en los términos de este fallo [daños en la vida relación], puede ser padecido por la víctima directa o por otras personas cercanas, tales como el cónyuge, los parientes o amigos, y hace referencia no sólo a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, sino que también puede predicarse de actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, requieren de un esfuerzo excesivo, o suponen determinadas incomodidades o dificultades. Se trata, pues, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior.⁶

Respecto del daño a la salud que no corresponde al daño material ni al moral, más si a una modalidad de daño autónomo, vale decir que el demandante PABLO MARTINEZ MINA a raíz del accidente de trabajo sufrido presentó una evidente afectación de su salud en su esfera psicofísica, pues conforme a se desprende de la historia clínica, como consecuencia de las heridas y fractura en el región frontal sufrida le fueron fijados 18 clavos a nivel de la cabeza que le mantienen con cefaleas permanentes con dolor intenso por lo cual cada 3 meses debe aplicarse inyecciones para paliar el dolor físico, sumado a ello se tiene que al haberse sometido a múltiples cirugías se desencadenan una serie de actos de alteración del cuerpo del paciente, como la sedación, la ruptura de membranas, entubación, punción, canalización, incisión, la sutura, etc. Después de ello, siguió necesariamente una convalecencia en la que se ha seguido con dolor y malestar limitándose la capacidad del demandante para realizar ciertas actividades incluso la misma movilidad.

Y qué decir de la alteración de la actividad sexual y libido de la cual el demandante PABLO BERMUDEZ MINA y su esposa ya no pueden gozar debido a las lesiones sufridas, la ausencia de disposición, la falta o ausencia de virilidad como consecuencia de la alteración de los procesos orgánicos y fisiológicos relacionados con la sexualidad haciendo tórpida la intimidad, circunstancias que afectan de manera evidente su salud en su esfera psicofísica en el concepto primigenio definido por la organización mundial de la salud y acogido por la jurisprudencia del consejo de estado como un bien jurídico entendido como “estado completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades”

La sentencia proferida por la sección tercera del consejo de estado en sala plena con Radicación número: **23001-23-31-000-2001-00278-01(28804) consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO**

⁶. (en similar sentido, fallos de 18 de octubre de 2000, exp. 11948; 25 de enero de 2001, exp. 11413; 9 de agosto de 2001, exp. 18273; 14 de abril de 2005, exp. 15775; 1 de marzo de 2006, exp. 15459; y 20 de septiembre de 2007, exp. 14272; entre otros)” (sentencia del 13 de mayo de 2008, Ref: Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01).

(...) “daño a la salud” -esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica –ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49) para determinar una indemnización por este aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

(...) Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como ahora lo hace la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos que han sido reconocidos en diversas latitudes, como por ejemplo la alteración de las condiciones de existencia (**v.gr. Francia**), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a principios constitucionales de igualdad.

En primer lugar, es necesario aclarar que, a la luz de la evolución jurisprudencial actual, resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de incapacidad, esto es, a la cifra estimada por las juntas de calificación cuando se conoce. Más bien se debe avanzar hacia un entendimiento más amplio en términos de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, por cualquiera de los medios probatorios aceptados, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar, entre otras, las siguientes variables:

- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
- Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- El dolor físico, considerado en sí mismo.
- El aumento del riesgo vital o a la integridad
- Las condiciones subjetivas que llevan a que una determinada clase de daño sea especialmente grave para la víctima (v.gr. pérdida de una pierna para un atleta profesional).

Por su parte la sala laboral de la corte suprema de justicia mediante sentencia **SL 5191 de 2019** puede recordarse que sobre este tema del daño a la vida en relación esta sala enseñó el siguiente:

Puede recordarse que sobre este tema sobre el daño a la vida en relación esta sala en reciente pronunciamiento **CSJ SL 1361 de 2019**, en el que reiteró lo dispuesto en las sentencias **CSJ SL, 22 de enero de 2008, rad 30621, SL 30 de octubre de 2012, rad 39631 y la SL 4913-2018**:

Se originan por el menoscabo a la vida en relación social, que no se equipara a la aflicción íntima, que se padece en el interior del alma, calificada como daño moral subjetivo, ni tampoco con la pérdida de la capacidad laboral, que es estimable en dinero a partir del grado de invalidez establecido por las juntas calificadoras, es el daño que afecta la aptitud y

disposición de disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales, es una afectación fisiológica que aunque se exterioriza, es como la moral inestimable objetivamente, y por lo tanto inevitablemente sujeta al arbitrio judicial.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA DEMANDADA EMCALI.

La responsabilidad solidaria no se predica para la demandada EMCALI de su culpa como elemento generador del resultado en la ocurrencia del siniestro laboral ocurrido, como si para el empleador JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS, sino de la calidad de beneficiario de la obra o del servicio personal prestado por el demandante en virtud de un vínculo jurídico civil o comercial existente entre el empleador y dicho beneficiario.

Respeto de la solidaridad el artículo **34 del código sustantivo del trabajo** preceptúa:

Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

Se identifica un trípole jurídico cuya taxonomía es la siguiente: una primera relación de carácter civil o comercial entre el dueño de la obra y el contratista por la necesidad de un bien o servicio contratado; a su vez el contratista que se vale la mano de obra humana o servicio personal desplegado por el trabajador, y con ello se identifica una segunda relación jurídica de carácter subordinado, para con ella satisfacer las necesidades del servicio contratado por el dueño de la obra referente a la primera relación jurídica.

La solidaridad que se le enrostra a EMCALI no deriva de alguna relación jurídica real o aparente que se ostente respecto del trabajador que deriven obligaciones de diligencia y cuidado para con este, sino, del status contractual del trípole jurídico arriba referido en el cual funge como beneficiario de la obra surgiendo así dos condiciones para que proceda la solidaridad, esto es: i. que las actividades que realiza el contratista y el beneficiario de la obra sean conexas, afines, no extrañas, que guarden una afinidad, ii. Que la actividad personal desarrollada por el trabajador cuando surge el siniestro laboral corresponda a aquellas actividades que no son extrañas a las que realiza el beneficiario o dueño de la obra pero que este pese a que las puede realizar de manera directa ha preferido por un acto tercerizado beneficiarse de la actividad personal proveída por el contratista.

En el asunto de estudio la demandada EMCALI es prestadora de servicios públicos domiciliarios entre los cuales se encuentra la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, mantenimiento que implica actividades de la construcción, es decir actividades que le son conexas que no son extrañas a su giro ordinario.

La sala laboral de la corte suprema de justicia, desde tiempos foráneos, ha sustentado una sólida tesis jurisprudencial en materia de Solidaridad en la culpa patronal, que resulta procedente con fundamento en el artículo 34 del código sustantivo del trabajo, cuando en tratándose del giro ordinario de sus actividades mercantiles O Industriales, las del empleador, no son extrañas a quien es el beneficiario o dueño de la obra. No obstante, también resulta procedente la responsabilidad solidaria del dueño de la obra cuando el trabajo personal desempeñado por el trabajador accidentado no es extraña al giro ordinario de las actividades normales de aquel.

En reciente sentencia con radicación **39050** del 6 de marzo de **2013** con ponencia del doctor **Carlos Ernesto molina Monsalve** sostuvo:

Ha dicho la corte suprema de justicia que para que la solidaridad se dé, a más de que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.

Igualmente, tiene adoctrinado la sala que para su determinación se puede tener en cuenta la actividad específica desarrollada por el trabajador y no sólo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra.

En igual sentido ya se había pronunciado la sala de casación laboral en la **sentencia 33082** del 2 de junio del año **2009** así:

“con todo, encuentra la corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades que, de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del código Sustantivo del trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”.

En sentencia del 17 de agosto de 2011, radicada con el número, 35938, se reiteró el criterio reseñado, así:

“Ha enseñado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que la culpa es diferente del principio de solidaridad, habida cuenta que mientras aquélla se origina en un error de conducta del empleador, que forma parte de la causa de la obligación, que puede llegar a comprometer la responsabilidad de otros; la solidaridad que emana de la ley viene a ser parte del efecto de la responsabilidad, trayendo al responsable solidario **como un garante** de las obligaciones que emanan del empleador.

Entonces, dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se requiere la acreditación de la culpa de quien es el verdadero empleador, es decir, el contratista independiente, toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del laborío. Sin embargo, de conformidad a la ley laboral (artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) el dueño o beneficiario de la obra conexas con su actividad principal, funge como garante en el pago de dicha indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino precisamente por virtud de la solidaridad, lo que, a su vez, como lo ha asentado esta Sala, le permite, después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que reafirma aún más su simple condición de garante. Pero sin ir tan lejos, nótese que el mismo artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de que el beneficiario “repita contra él [empleador] lo pagado a esos trabajadores”.

“Sobre el particular, es necesario traer a colación la sentencia de casación del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, en que esta Sala, al analizar un caso similar, alrededor de la solidaridad del beneficiario de la obra en tratándose de las indemnizaciones y prestaciones debidas por los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un trabajador, con ocasión del accidente de trabajo por culpa patronal, así razonó:

“la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada, ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes:

“Más el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria,

sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores.”

“Esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al Municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes.

” De esta manera lo ha dicho esta Corporación:

““La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada” (Sent., 23 de septiembre 1960, “G.J.”, XCIII, 915).

vi. RELACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Pruebas documentales en poder del demandado JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS

Respetuosamente solicito señor juez que en el auto admisorio de la demanda se ordene al demandado **JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS** para que con la contestación de la demanda aporte los siguientes medios de prueba documental los cuales deben encontrarse en su poder, so pena su omisión como configurativo de un indicio grave en su contra, inadmisión y rechazo de la demanda conforme lo dispone el parágrafo del artículo 18 de la ley 712 de 2001:

Primero: documento suscrito por el demandado JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS sobre sistema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, vigente a (26) de febrero de 2018 con especificación de la documentación y fundamentación **del diseño y ejecución del programa de prevención y protección contra caída en alturas, medidas colectivas de prevención**, en beneficio de sus trabajadores.

Segundo: subprograma de protección contra caídas, vigente a (26) de febrero de 2018, con especificación de la documentación y especificación de las medidas de control para inspección de elementos de seguridad para el desempeño de trabajo en alturas.

Tercero: certificado expedido por el fabricante de los equipos para trabajo en alturas, en especial los que hagan parte de las medidas activas de protección, utilizados por el trabajador el día del accidente de trabajo ocurrido, con especificación de fecha de fabricación, usos anteriores, registros de inspecciones, certificaciones y registro de pruebas en la obra, antes de ponerlos en funcionamiento, de conformidad con el inciso 4°, 5° y 6° del numeral primero del artículo 22 de la resolución 1409 de 2012.

Cuarto: actas de reunión del comité paritario de salud ocupacional debidamente diligenciadas, correspondientes al mes de diciembre de 2017, enero y febrero del año 2018 en las que se hayan advertido y evaluado sobre la presencia de factores de riesgos con relación a los elementos de Protección y prevención sobre trabajos en alturas, protocolos o Procedimientos, antes, durante y después de la realización de trabajos con riesgo de caída.

Quinto: programa de inspección de los equipos para trabajos en alturas, así como las personas calificadas y autorizadas por el fabricante para realizar dicha inspección, con especificación documental de las técnicas de inspección de los equipos de seguridad.

Sexto: permiso diligenciado y firmado de trabajo en alturas y/o lista de chequeos del día (26) de febrero de 2018, con los siguientes registros:

1. especificación de descripción y procedimiento de la tarea, 2. elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea, 3. Verificación de los puntos de anclaje, 4. Verificación de prevención contra caídas, 5. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas, 6. Verificación de un funcionamiento de un sistema de protección contra caídas para el día de la labor desempeñada con especificación del sistema de protección contra caídas adoptado por las demandadas para practicar en la labor en la cual el demandante sufrió el accidente de trabajo ocurrido, sean conectores para restricción de caídas o conectores para detención de caídas o eslingas con absolvedor.

Séptimo: panorama de riesgos diseñado y ejecutado a cargo del demandado **JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS** vigente a febrero (26) de enero de 2018 previo a la ocurrencia del accidente de trabajo, con la indicación de evaluación Escrita realizada por el coordinador de trabajo en alturas, sobre el manejo de sistemas de protección pasiva para suspensión de trabajadores ante una caída.

Octavo: constancia escrita sobre capacitación en entrenamiento básico, entrenamiento avanzado, reentrenamiento anual sobre trabajo en alturas que hayan brindado el demandado **JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS** al demandado **PABLO BERMUDEZ MINA**, tal como lo ordena el artículo 9 de la resolución 1409 de 2012.

Pruebas documentales aportadas con la demanda

Primero: estatutos internos de la demandada EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI sigla EMCALI.

segundo: registros civiles de nacimiento de los demandantes LADI JOHANA BERMUDEZ MARTINEZ, MAYERLI BERMUDEZ MARTINEZ con lo cual demuestro su grado de consanguinidad con el demandante PABLO BERMUDEZ MINA.

Tercero: copia registro civil de matrimonio entre los demandantes PABLO BERMUDEZ MINA y ERIKA MARTINEZ BORRERO.

Cuarto: prueba de agotamiento de la vía gubernativa ante la demandada EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI sigla EMCALI como requisito de procedibilidad de conformidad con lo consagrado en el artículo 6 del código de procedimiento laboral y de la seguridad social.

Quinto: copia simple del dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral del demandante PABLO BERMUDEZ MINA evaluada por la junta regional de calificación de invalidez.

Sexto: acta de consulta médica realizada por la ARL seguros de vida AXA Colpatria S.A.

Séptimo: informe de accidente de trabajo diligenciado por el señor JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS ante la administradora de riesgos laborales de COLPATRIA.

Octavo: informe de investigación de accidente de trabajo realizado por la administradora de riesgos laborales de COLPATRIA en el que se encuentran identificadas las causas inmediatas y básicas que dieron lugar al accidente de trabajo sufrido por el demandante.

Noveno: historia clínica en la que se encuentran consignadas las lesiones sufridas por el demandante con el accidente de trabajo sufrido, los procedimientos quirúrgicos y terapéuticos practicados.

Decimo: historia clínica psiquiátrica en la cual se pueden evidenciar los diagnósticos que afectan la salud mental del demandante PABLO BERMUDEZ MINA.

Decimo primero: (3) constancias de pago de subsidio por incapacidades laborales realizado por el demandado JULIAN GONZALEZ CASAS.

Décimo segundo: respuesta a la reclamación administrativa dada por la demandada EMCALI a los demandantes respecto del pago de la indemnización reclamada.

Interrogatorio a instancia de parte. Solicito señor juez que, con el decreto de pruebas, ordene la práctica del interrogatorio a instancia de parte del señor JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS a fin de que absuelva el que le formularé de manera oral en audiencia pública cuando así lo ordene.

Testificales. Solicito respetuosamente el decreto y practica de los testimonios de los señores **Eliseo Torres Arboleda, Paulino Gamboa, Éver Ortiz Angulo** para que en audiencia pública depongan todo en cuanto sepan en relación a todos los hechos de la demanda quienes podrán ser notificados a través de las siguientes direcciones electrónicas: nerbuf@yahoo.es, nerbuf@outlook.com

vii. ANEXOS

1. todos los documentos relacionados como pruebas documentales
2. poderes especiales otorgados por los demandantes que me faculta para actuar
3. resolución n°003 del 28 de noviembre de 2019 correspondiente a los estatutos internos de la demandada EMCALI y su naturaleza jurídica.

viii. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Por el factor objetivo de competencia, Atendiendo a la clase de controversia presentada es decir derivada de un contrato de trabajo por la culpa patronal equivalente a la culpa contractual, así como al lugar donde ocurrió el accidente de trabajo, siendo el mismo donde se prestó el servicio personal, es competente el juez laboral del circuito de Cali para conocer del presente asunto, debiendo aplicar el procedimiento previsto para un proceso ordinario laboral de primera instancia.

ix. ESTIMACION RAZONADA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

En observancia al contenido indemnizatorio de las pretensiones de la demanda, las cuales corresponden a una indemnización plena de perjuicios, las estimo es un monto no inferior a los \$ 300.000.000 (trescientos millones de pesos M/CTE), sin que la presente estimación limite las condenas a un monto mayor, con todo ateniéndose a lo probado en el debate judicial.

x. LUGAR DE NOTIFICACIONES

Los demandantes podrán recibir notificaciones en el barrio mariano ramos de esta ciudad, dirección kra 49A # 43-85, correo electrónico erikamartimet@gmail.com

y el suscrito apoderado judicial recibiremos notificaciones en mi despacho de abogado ubicado en la calle 11 n°1-07, oficina 311A, del edificio JORGE GARCES

BORRERO de la ciudad de Cali, teléfono 3007353691, dirección electrónica nerbuf@yahoo.es.

Los demandados: Julián Lisandro González casas: calle 6C n°31n 59, teléfono 8203141 Popayán, dirección electrónica juligo2005@hotmail.com, juligoca2005@hotmail.com

Empresas públicas municipales de Cali: avenida segunda entre calle 10 y 11, CAM torre EMCALI, Cali-valle. notificaciones@emcali.com.co

Respetuosamente



YAIR DIAZ TAMARA
CC n°3.800.165 EXPEDIDA EN CARTAGENA
TP n°158411 CSJ

ORGANIZACIÓN VOTATORIA REGISTRADURA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL				Indicativo Serial
NÚMERO 142-0250252		REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO		30710253
Datos de la oficina de registro - Clase de oficina				
Registrado	Apellido	Nombre	Concedido	Inspección de fecha
COLONIA	VALLE	CALI		Código 9-8-9-2
Datos del inscrito				
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		
HERNANDEZ		MARTINEZ		
NOMBRE				
JOAN PAULO				
Fecha de nacimiento				
Año	Mes	Día	Hora	Grupos sanguíneos
1994	02	02	14:00	O
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento de hoy en día)				
COLOMBIA		VALLE		CALI
Tipo de documento solicitado - Declaración de testigos				Registro certificado en partes o no
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO				A 1336492
Datos de la madre				
Apellidos y nombres completos				
MARTINEZ DOMERG ERIKA				
Documento de identificación (Clase y número)				Nacionalidad
CC 31.569.397 CALI				COLOMBIANA
Datos del padre				
Apellidos y nombres completos				
HERNANDEZ MINA PABLO ENRIQUE				
Documento de identificación (Clase y número)				Nacionalidad
CC 16.761.232 CALI				COLOMBIANO
Datos del declarante				
Apellidos y nombres completos				
HERNANDEZ MINA PABLO ENRIQUE				
Documento de identificación (Clase y número)				Firma
CC 16.761.232 CALI				<i>Pablo Enrique Hernández Mina</i>
Datos primer testigo				
Apellidos y nombres completos				
Documento de identificación (Clase y número)				Firma
[Espacio para datos del testigo]				[Espacio para firma]
Datos segundo testigo				
Apellidos y nombres completos				
Documento de identificación (Clase y número)				Firma
[Espacio para datos del testigo]				[Espacio para firma]
Fecha de inscripción				
Año	Mes	Día	Nombre y firma del funcionario que autoriza	
2001	03	27	ALVARO TIRO SERRANO	
Reconocimiento de firma			Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento	
<i>Pablo Enrique Hernández Mina</i>			ALVARO TIRO SERRANO	
Firma			Nombre y firma	
ESPACIO PARA NOTAS				
LVP 281 T 32				



De: [Yair Diaz tamara](#) >

Para: [repartolaboralcali...](#) >

[juligoca2005@hotmail....](#) >

[Notificaciones Emcali](#) >

[nerbuf@outlook.com](#) >

[Yair Diaz tamara](#) >

10 de julio de 2020, 2:25 p... 

REPARTO DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

SEÑORES

OFICINA JUDICIAL DE REPARTO

LABORAL DE CALI

ESD

Con la presente envío solicitud de reparto de demanda ordinaria laboral de primera instancia de manera simultanea a demandados



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional
Administración Judicial
Oficina Judicial de Cali

JURISDICCION ORDINARIA

**Acuerdos 1472 (Civil) 1480 (Laboral) 1667 (Familia) de 2002
y 10443 de 2015 (Actualiza grupos de reparto Civil y Familia)**

Especialidad:

LABORAL DEL CIRCUITO

Familia - Civil Circuito - Civil Municipal -
Laboral del Circuito - Pequeñas Causas Laborales

Grupo de reparto:

2

Nombre: ordinario laboral primera instancia

Partes del proceso

Identificación

C.C. Cédula de ciudadanía / Nit:

Nombre(s) y Apellido(s)

DEMANDANTE(S)

16.761.232

PABLO ENRIQUE BERMUDEZ MINA

31.569.397

ERIKA MARTINEZ BORRERO

11.439.734

LADI JOHANA BERMUDEZ MARTINEZ

DEMANDADO(S)

Nit: 890.399.003-4

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI

76.319.787

JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

APODERADO

3.800.165

YAIR DIAZ TÁMARA

Cuadernos: 3 Archivos Folios: 156

Adjunta CD(s): (Si) (No) Cantidad: _____

Anotaciones especiales (documentos originales / folio) / Observaciones

RADICACION

76001

DTE: PABLO ENRIQUE BERMUDEZ
MINA Y OTROS
CC 16.761.232

El presente correo cuenta de los
siguientes archivos:

Archivo 1: caratula diligenciada
Archivo 2: demanda y poderes en
formato PDF debidamente foliados
Archivo 3: anexos en formato PDF
debidamente foliados

Att

YAIR DIAZ TÁMARA
APODERADO DEMANDANTES

Enviado desde [Correo](#) para Windows 10



segundo ar...z Mina.pdf

979 KB



tercer archi...manda.pdf

13 MB



Emcali Eice Esp

13/07/20

Para: nerbuf@yahoo.es >

RE: REPARTO DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

Buenas tardes

Gracias por contactarse con las
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
- EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se recibió
su comunicación y se le asignó el
número de radicado 100141692020

*****Este correo es de carácter
informativo, favor no responder a este
mensaje.*****